

Chernóbil: la memoria incómoda y el futuro que no espera

Por qué el Perú no puede darse el lujo ni del miedo ni de la improvisación

A cuarenta años, Chernóbil no es historia. No es un fantasma de la Guerra Fría ni una lección aprendida en un manual. Sigue siendo una advertencia muy concreta sobre lo que puede pasar cuando una tecnología de enorme impacto se maneja sin controles sólidos, sin transparencia y sin instituciones capaces de actuar a tiempo. Su memoria no paraliza, pero sí coloca una exigencia sobre la mesa.

Y esa mesa es, justamente, la que hoy ocupa el Perú.

Coincidiendo con este aniversario, un renovado debate global sobre la energía nuclear toca nuestra puerta. La crisis climática, la necesidad de seguridad energética y la volatilidad de los combustibles fósiles llevan a varios países a reconsiderar su apuesta nuclear. No somos espectadores: con la reciente Ley N° 32560, que promueve la generación eléctrica de origen nuclear, el Perú ha dado una señal política inequívoca. Pero una señal no es una estrategia. Y aquí, la solemnidad de la decisión obliga a un rigor que no siempre nos acompaña.

La coartada del reactor

Un sofisma recorre el debate: situar el riesgo en la máquina. Se habla del uranio, de la radiación, de los reactores. Es una forma de terror selectivo, quizás comprensible, pero impreciso.

Chernóbil no explotó por un fallo técnico. Explotó porque la verdad fue sustituida por la obediencia, la seguridad por la propaganda y el control independiente por la conveniencia política. Fue un colapso institucional con disfraz de accidente. Fukushima, lustros después, subrayó la misma clave: la ingeniería más avanzada se vuelve frágil si las estructuras de gestión y supervisión son deficientes.

La lección es nítida: la robustez de un reactor no compensa la debilidad de las instituciones que lo rodean. El riesgo real no es el átomo; es la arquitectura estatal que lo contiene.

El síndrome de la velocidad

A este renacimiento nuclear lo acompaña un impulso inquietante: la prisa. Simplificar licencias, acortar plazos, flexibilizar estándares. Es la lógica de la eficiencia que en otros sectores puede funcionar. En la energía nuclear, es la antesala de la irresponsabilidad.

Esta tecnología no admite el “ensayo y error” de las startups. Aquí no se itera. Se planifica a largo plazo, se regula con mano firme y se supervisa con una mirada que no parpadea. El entusiasmo por los nuevos reactores modulares (SMR), que la propia ley peruana promueve, puede ser un espejismo peligroso si no viaja acompañado de una cultura institucional igualmente moderna y sólida.

La ventaja silenciosa

Sería injusto, sin embargo, pintar al Perú como un recién llegado sin hoja de vida. Durante más de tres décadas, el reactor RP-10 en Huarangal ha sido una pequeña joya de la ciencia peruana poco conocida por el gran público. No produce electricidad, pero sí genera un capital invaluable: competencias técnicas, formación de especialistas y la producción de radioisótopos vitales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer.

Ese activo científico nos diferencia de otros países que parten de cero. Pero hay que decirlo con claridad: el salto de la investigación aplicada a la generación eléctrica a escala no es una evolución natural. Es un cambio de magnitud que demanda otro tipo de fortaleza estatal.

La pregunta que importa

El debate, por tanto, no debería ser si necesitamos o no energía nuclear. Con nuestras brechas de cobertura eléctrica y territorios donde la luz sigue siendo un lujo, los argumentos técnicos a favor pueden ser sólidos.

La pregunta es otra: ¿está el Estado peruano en condiciones de gestionar esta responsabilidad sin desviarse de ella?

Responder que sí exige algo más caro y difícil que una ley: exige un regulador con independencia blindada a las presiones políticas, sistemas de fiscalización con dientes y conocimiento técnico, transparencia que se practique y no solo se publique, protocolos de emergencia que no se oxiden en un cajón y, el mayor de los retos, una política de Estado que no se reinicie con cada nuevo gobierno.

En síntesis, exige un Estado que funcione con una previsibilidad anclada en el rigor.

Entre el miedo y la ingenuidad

El debate se ha entrampado entre dos posturas insuficientes. De un lado, el pánico irracional que blande a Chernóbil como un tótem y descarta la opción nuclear sin matices. Del otro, el optimismo acrítico que endiosa la tecnología de cuarta generación y actúa como si la mera decisión política bastase.

Ambas posiciones se parecen en lo esencial: le escapan a la complejidad de un análisis serio sobre las condiciones reales del país. La primera se esconde en el miedo; la segunda, en la ingenuidad. Ninguna de las dos nos sirve como hoja de ruta.

La prueba que no está en el reactor

Chernóbil conserva un valor normativo. No es un ícono del desastre técnico, sino la prueba de que las instituciones fallan antes que las máquinas. La exigencia que nos deja no es temerle a la tecnología, sino construir una autoridad estatal a la altura de los peligros que decide asumir.

Hoy, el Perú no solo decide sobre su matriz energética. Se enfrenta, en un mismo acto, a una oportunidad y a un examen profundo. La oportunidad de incorporar una tecnología estratégica

para su desarrollo. El examen demuestra que puede abordar una decisión de este calibre con seriedad, controles y continuidad.

Esa demostración de madurez no se verá en los reactores. Se hará visible, o no, en la calidad de las instituciones que los regulen y en la voluntad firme de sostener sus estándares, incluso cuando hacerlo resulte incómodo. Ahí reside, en definitiva, la verdadera prueba.